

## POLÍTICA & JUSTICIA: CRISIS EN AMERICA DEL SUR

por Livio Zanotti

lidiavolononmuoremai.it

Es un frenesí político-judicial arremolinado entre Brasilia y Buenos Aires el efecto desatado por *The Intercept Brasil*, con la divulgación de las comprometedoras conversaciones reservadas entre el ex juez Sergio Moro y el jefe de su grupo de fiscales, Deltan Dallagnol, en el proceso que ha llevado a la cárcel al ex presidente Lula da Silva. Encabezaba todos los sondeos y su eliminación desde el juego político en la víspera de las elecciones presidenciales desvirtuó totalmente la consulta popular. Ahora el Tribunal Superior Federal (STF), se va a reunir para decidir si revoca la condena que le impuso a Lula y dispone su libertad.

Argentina, ya metida de cabeza en la campaña para las presidenciales del próximo octubre, vive este trastorno brasileño como propio. Por considerar que algo similar habría pasado entre una parte del sistema judicial que actuó partidariamente y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, arrastrada en una decena de procesos por corrupción. Y no se trata de una disputa aristotélica entre ethos y pathos, ni de una oposición abstracta entre la inclinación de la política al pragmatismo y el anclaje de la justicia a principios firmes. Sino que entre los mismos magistrados, más allá de los fermentos que surgen desde la opinión pública, hay dudas fundamentadas sobre la transparencia de tantos juicios.

Las resume todas con absoluta claridad el comentario del presidente de la Suprema Corte de Justicia (que en una sociedad profundamente fracturada por la que se convino llamar convencionalmente la *grieta*, tampoco representa la unanimidad; pero sí, la máxima responsabilidad del poder judicial): "Los argentinos van perdiendo confianza en el poder judicial, dudan que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana". El hecho de que no se trate de un fenómeno disfuncional limitado a este sub-continente, no reduce en nada la lesión que produce al sistema democrático. Al revés, multiplica las alarmas para la salud republicana.

Entre los grandes países de América del Sur, que en estas dos últimas décadas y hasta las crisis actuales fueron protagonistas de extraordinarios crecimientos económicos y desarrollos políticos, Brasil y Argentina están, probablemente entre aquellos países que tienen las instituciones más estructuradas adentro del sistema republicano y democrático. No sin sacrificios de sangre y de duras luchas sociales,

supieron capotear los trágicos rastros de los golpes militares del siglo XX. Logrando ingresar al nuevo milenio con modelos socio-económicos tal vez no cabalmente realizados ni libres de contradicciones relevantes; pero con total y absoluto respeto de la división de los poderes en un estado moderno, así como sugiere Montesquieu en su “Espíritu de la leyes”, que luego de 250 años sigue todavía plenamente vigente.

Es por lo tanto con especial ansiedad que justamente en estos dos maravillosos países -cuya extensión suma más de la mitad del sub-continente y dos tercios de sus capacidades productivas-, hay que remarcar serios y para nada aislados episodios de violación de la mutua independencia entre los poderes ejecutivo y judicial; y dentro de este entre instancias distintas y con funciones separadas, que tales -distintas y separadas- tienen que mantenerse para que resulte garantizado no simplemente el derecho del directo usuario del servicio de justicia; sino que de esta manera se le extiende la misma garantía a todos los demás ciudadanos. Es un vínculo, un rasgo fundamental para la correcta aplicación de la ley. Más aún en cuanto es justamente en el plan de los derechos adquiridos y de aquellos todavía para conquistar que se desarrollan concretamente la confrontación social y la lucha política de nuestros tiempos.

Sergio Moro, el juez que condenó a 12 años y medio de cárcel al ex jefe de estado Lula da Silva por pasar, casi de inmediato, a ser el ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, parece haber actuado como si desconociera la Constitución y el código procesal penal de su país. Es lo que demuestran sus conversaciones con el jefe de los fiscales de la causa “Lava-Jato”, Deltan Dallagnol, publicadas por **The Intercept Brasil**, la página brasileña del diario *on-line* fundado con una inversión de 250 millones de dólares por Pierre Omydiar, dueño del famoso sitio de intermediación comercial E-bay. Moro y Dallagnol, es decir el juez y el fiscal, a quienes la ley confía la obligación de actuar al primero como el contralor del segundo, en cambio concertaban la orientación de la investigación hacia un resultado predeterminado.

**The Intercept** recuperó una gran cantidad de documentación de relevancia judicial y política, es decir de notable interés público, que ponen a la vista graves irregularidades. Es material que evidencia la sustancia de las dudas que desde el comienzo fueron acompañando la condena de Lula y ahora desencadenan las reacciones de la gente común y en el Congreso. Los dos magistrados intercambian docenas de mensajes, que se intensifican en cada momento importante, en cada corrección en las líneas de investigación sobre Lula así como sobre la presidenta Dilma Rousseff, antes que el Congreso votara su *impeachment*. No se trata de un normal intercambio de informaciones entre colegas que trabajan en un mismo caso.

En la intimidad de la conversación privada, la libertad de las palabras se vuelve apasionada, aparecen sugerencias que se leen como órdenes, el explícito menoscabo de algunas *chats* se muestran opuestamente a la serena imparcialidad del juez, su (supuesta) fundamental virtud.

En Brasil, el escándalo judicial atrapa a Bolsonaro en el vértigo de una caída de imagen, a solo unos pocos meses de su elección. La economía sigue en recesión. Frenado el proyecto de disminuir el monto de las jubilaciones para ahorrar 250 mil billones de euros en los próximos 10 años, sin lo cual el ministro de Finanzas, el super-liberal Paulo Guedes, amenaza con dejar el gobierno y hasta irse del país. Una medida por lo tanto básica. Pero no hay mayoría para convertirla en ley. Y conseguirla, de alguna manera requiere demasiadas cortesías y complacencias. Bolsonaro no descarta una jugada extrema: instigar a la plaza en contra del Congreso. Su Vice, el General Hamilton Mourao, ya enfrentado con los tres hijos del jefe de estado acusados de corrupción, no tiene la misma idea. El presidente de la Cámara de diputados, Maia, abiertamente se opone.

En la Casa Rosada la polémica sobre los jueces encuentra al presidente Macri en un momento político más complicado aún: su proyecto económico se hundió en la inflación y la cesantía. Argentina es hoy en día el país más endeudado de América Latina. A los acreedores internos e internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional, cuya dirección bajo las presiones de Donald Trump le concedió el crédito-record de 57 mil millones de dólares, Argentina debe un PBI redondo: 334 mil y 289 millones de dólares, sin contar las deudas de las Provincias y del Banco Central (datos del ministerio de Hacienda). Macri espera de tal manera resistir cuatro meses más, y lograr la reelección en el próximo octubre. En los tribunales de Comodoro Py está el más furibundo de los frentes de batalla, cuyo final resultará decisivo.

Protagonista principal, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el doble papel de acusada en los varios juicios de los que recién empezó el primero, y candidata a la vicepresidencia de la República en la fórmula con el ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Más de un comentarista nota como el cronograma de los procesos coincide sorprendentemente con los intereses electorales del presidente Macri. Quien en el intento de evitar erosiones de su electorado ultra-conservador, acaba de cooptar en su *dupla* para las elecciones de octubre al peronista de extrema derecha Miguel Angel Pichetto, ex jefe de los senadores kirchneristas en la presidencia de Cristina. Mientras con una preocupación paralela, el presidente Bolsonaro entregaba una condecoración a su ministro de Justicia, el

cuestionado Sergio Moro. Ambos jefes de estado preocupados de no quedar presos de los escándalos judiciales.

También hay un juez federal indagando una supuesta organización ilegal de espionaje paralelo con finalidad extorsiva. Algunos indicios involucrarían personajes cercanos a los servicios secretos, funcionarios de Justicia, un periodista, pequeños empresarios y algunos *arreglados*, uno de los cuales se presentaba como abogado sin serlo y cayó preso. El gobierno de Macri ordenó un proceso político al juez. En Brasilia el ministro Moro propone una reforma que permita encarcelar un condenado penal en la segunda instancia, a pesar de que según la Constitución la sentencia solo queda firme después de la tercera y última. En ambos países una dolida muchedumbre de presos, la mayoría desamparados, esperan encerrados en las cárceles la sentencia definitiva. Son rehenes del sentimiento de inseguridad que viven nuestras sociedades. A las que la política ofrece el fetiche de la mano dura, en cambio de una seguridad real cada día más difícil a causa de las injusticias sociales. El uso político de la justicia desvela también al Papa Francisco, quien más que nunca mira de cerca las vicisitudes latinoamericanas.